



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

12^a REUNION – 7^a SESION ORDINARIA
18 y 19 DE JUNIO DE 2003

Presidencia del vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI,
del señor presidente provisional del Honorable Senado,
ingeniero JOSE L. GIOJA, y del señor vicepresidente del Honorable Senado,
doctor MARCELO E. LOPEZ ARIAS

Secretarios:

Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI

Prosecretarios:

Señor JUAN J. CANALS, señor JOSE D. CANATA y señor ALFREDO A. LUQUES



PRESENTES.

AGÜNDEZ, Jorge A.
 ALPEROVICH, José J.
 AVELÍN, Nancy B.
 BAGLINI, Raúl E.
 BAR, Graciela Y.
 BARRIONUEVO, José L.
 BRIZUELA DEL MORAL, Eduardo S.
 BUSTI, Jorge P.
 CAFIERO, Antonio F.
 CAPARRÓS, Mabel L.
 CAPITANICH, Jorge M.
 CASTRO, María E.
 COLOMBO de ACEVEDO, María T.
 CONTI, Diana
 CURLETTI, Mirian B.
 DANIELE, Mario D.
 ESCUDERO, Sonia M.
 FALCÓ, Luis
 FERNÁNDEZ, Nicolás A.
 FERNÁNDEZ de KIRCHNER, Cristina E.
 GALLIA, Sergio A.
 GIOIA, José L.
 GÓMEZ DE BERTONE, Deolide C.
 GÓMEZ DIEZ, Ricardo
 GUINLE, Marcelo A. II.
 HALAK, Beatriz S.
 IBARRA, Vilma L.
 ISIDORI, Amanda M.
 JENEFES, Guillermo R.
 LAMBERTO, Oscar S.
 LATORRE, Roxana I.
 LESCANO, Marcela F.
 LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
 MAESTRO, Carlos
 MARTÍ, Rubén A.
 MAZA, Ada M.
 MENEM, Eduardo

NERA, Mario R.
 MONTOYA, Jorge L.
 MORALES, Gerardo R.
 MORO, Eduardo A.
 MÜLLER, Mabel H.
 NEGRE de ALONSO, Liliana T.
 OVIEDO, Mercedes M.
 PARDAL, Jorge A.
 PASSO, Juan C.
 PAZ, Elba A.
 PERCEVAL, María C.
 PICHETTO, Miguel A.
 RASO, Marta E.
 SALVATORI, Pedro
 SAPAG, Luz M.
 SEGÚI, Malvina M.
 TAFFAREL, Ricardo C.
 TERRAGNO, Rodolfo H.
 USANDIZAGA, Horacio D.
 WALTER, Pablo H.
 YOMA, Jorge R.

LICENCIA POR ENFERMEDAD:

CHIAPPE, Lázaro A.

AUSENTES CON AVISO:

ARANCIO de BELLER, Lylia M.
 COLAZO, Mario J.
 MAYANS, Miguel A.
 OCHOA, Raúl E.
 PARDO, Angel F.
 PUERTA, Federico R.
 VERNA, Carlos Alberto
 ZAVALLA, José L.

EN COMISION:

LOSADA, Mario A.
 MARTÍN, Floriana N.
 PRADES, Carlos A.

SUMARIO

1. Manifestaciones en minoría. (Pág. 2536.)
2. Izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 2537.)
3. Lectura y aprobación del plan de labor. (Página 2537.)
4. Consideración del dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 5º del proyecto de ley que le fue pasado en revisión por el cual se instrumenta un régimen de preservación de patrimonios culturales, de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada de industrias destinadas a la defensa nacional (S.-764-800/02). Se aprueba. (Pág. 2538.)
5. Consideración sobre tablas del dictamen de las comisiones de Salud y Deporte en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica el artículo 15 ter de la ley 19.032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.E.-177/03). Se aprueba. (Pág. 2552.)
6. A pedido de la señora senadora Negre de Alonso, se plantea una modificación al plan de labor para que se trate sobre tablas el pedido de interpelación al ministro de Economía, Lavagna (Pág. 2589.)
7. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Colombo solicitando la realización de una auditoría integral sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (S.-1.168/03). Se aprueba. (Pág. 2590.)
8. A pedido del señor senador Walter se plantea una cuestión de privilegio contra el director

minutos podemos comenzar la sesión o, de lo contrario, se proceda a tomar lista. Tenemos una agenda bastante compleja y, además, hay un compromiso con la Cámara de Diputados para remitir una sanción, y lo debemos hacer a una hora razonable. La convocatoria era a las 16 y ya tenemos una hora de retraso.

Sr. Presidente (Gioja). – Estamos absolutamente de acuerdo, senador.

Insisto, entonces, ante los auxiliares de los bloques para que llamen a los senadores, así podemos empezar la sesión. Y, obviamente, en diez minutos pasaremos lista, senador.

–Luego de unos minutos:

Sr. Presidente (Gioja). – Con quórum reglamentario, la sesión está abierta.

2

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Gioja). – Invito a la señora senadora por La Rioja Ada Maza a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Ada Maza procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

3

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Gioja). – Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer.

–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 18-6-03

Consideración del Orden del Día N° 19.

Tratamientos sobre tablas a solicitar: dictamen en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 5° del proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el cual se implementa un régimen de preservación de patrimonios culturales, de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada de industrias destinadas a la defensa nacional y otras cuestiones conexas (S.-761, 800, 877, 884 y 1.017/02).

Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional modificando el artículo 15 ter de la ley 19.032 y ampliando las causales de intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.E.-177/03).

Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional modificando la Ley de Entidades Financieras 21.526 y la carta orgánica del Banco Central (P.E.-45/03).

Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la postergación para la próxima sesión del proyecto de ley en revisión sobre tributación del impuesto a las ganancias por parte de integrantes de los organismos de fiscalización. Este pedido obedece a una solicitud que me han formulado distintos senadores, quienes requirieron de mayor tiempo para analizar el tema en cuestión.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – En primer lugar, señalo que estamos de acuerdo con el pedido formulado por el señor presidente del bloque Justicialista.

A su vez, quiero solicitar la inclusión en el plan de labor del proyecto que cuenta con dictamen de comisión sobre creación de las universidades nacionales de Junín y Chilecito.

Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Gioja). – Está en consideración del plan de labor con las modificaciones propuestas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Gioja). –Queda aprobado el plan de labor.

4

REGIMEN DE PRESERVACION DE PATRIMONIOS CULTURALES

Sr. Presidente (Gioja). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 5° del proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el

cual se instrumenta un régimen de preservación de patrimonios culturales, de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada de industrias destinadas a la defensa nacional y otras cuestiones conexas, cuyo tratamiento con preferencia fue votado oportunamente.

—El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Legislación General han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al artículo 5º del proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el cual se implementa un régimen de preservación de patrimonios culturales, de empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada, de industrias destinadas a la defensa nacional y otras cuestiones conexas (S.-761/02, 800/02, 877/02, 884/02 y 1.017/02) y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan el rechazo de tales modificaciones e insistir con la redacción originalmente sancionada por este Honorable Senado.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 10 de junio de 2003.

*Guillermo R. Jenefer. — Jorge R. Yoma. —
María C. Perceval. — Horacio D.
Usandizaga. — Eduardo A. Moro. — Raúl
E. Baglini. — Miguel A. Pichetto.*

En disidencia: *Malvina M. Seguí. — Marta
E. Raso. — Sergio A. Gallia. — Roxana
Latorre. — Nicolás A. Fernández.
Rubén A. Martí. — Vilma Ibarra.
Liliana T. Negre de Alonso. — Diana B.
Conti.*

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la V Conferencia Endeavor - Emprendedores para la Nueva Argentina, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires los días 26 y 27 de junio de 2003.

Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Organizada por Endeavor - Emprendedores para la Nueva Argentina, se celebrará en Buenos Aires la V Conferencia Endeavor - Emprendedores para la Nueva Argentina los días 26 y 27 de junio de 2003.

Este evento cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (que oficializó su auspicio mediante su resolución 210/03), la Secretaría de Ciencia y Técnica, el Conicet, Fontar, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Universidad Austral, la Universidad de San Andrés, UCEMA y el Instituto Tecnológico Buenos Aires, entre otras instituciones.

Una conferencia plenaria, talleres temáticos variados, mesas informativas para el apoyo a emprendedores, la realización de una encuesta cuyos resultados serán repartidos entre los asistentes y la organización de un consultorio emprendedor serán algunas de las actividades previstas a llevarse a cabo durante este evento destinado a emprendedores económicos, sociales, políticos y académicos en todos los estadios de desarrollo (ideas, proyectos, nuevas empresas u organizaciones, empresas y organizaciones en expansión). Microempresarios, estudiantes y potenciales emprendedores, profesionales y funcionarios interesados en promover el desarrollo de la actividad emprendedora en sus instituciones también serán de la partida.

Estimular el espíritu emprendedor en toda actividad ligada a la producción y generación de proyectos significa pensar en poner al país en movimiento, significa apostar por una Argentina dinámica que ponga en marcha todo su potencial creativo.

Años atrás a los emprendedores se los llamaba "pioneros". Y los pioneros, en cualquier actividad, siempre fueron visionarios y líderes por naturaleza capaces de dar su vida por un ideal convertido en consecuente actividad. Gracias al sueño de un pionero se descubrió el continente americano, gracias al esfuerzo de millones, enormes superficies desiertas se convirtieron en un vergel. Los pioneros portan la antorcha que indica el camino del futuro, de un mañana mejor, de un porvenir donde las ideas se convierten en poderosas fuerzas de acción que transforman la realidad concreta.

Pioneros de ayer y emprendedores de hoy merecen nuestro reconocimiento, máxime cuando su desafío se vuelve más difícil debido al contexto adverso y al estado de emergencia económica que atraviesa el país.

Según la Real Academia Española, es emprendedor "quien acomete y comienza una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro". Queda en claro, pues, que emprendedores es los que necesitamos. Y los necesitamos en toda actividad que tienda al renacer económico de la Argentina, a la reactivación de sus economías regionales, al impulso de la pequeña y mediana empresa, a la mejora de la administración pública y de toda función de gobierno.

Por estas razones, elevamos a consideración de nuestros pares esta iniciativa, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.

Luis A. Falcó.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 24.374, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 1º: Gozarán de los beneficios de esta ley, los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante cinco años con anterioridad a la iniciación del trámite previsto en la presente y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de la casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación.

Art. 2º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.374, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 8º: El título que resulta del artículo 6º inciso e) tiene el carácter de justo título y se inscribirá en forma originaria como dominio revocable, con los efectos del artículo 3.999 del Código Civil, pero en los términos de esta ley. Cumplidos cinco años de la inscripción registral sin que pese sentencia o prevención judicial vigente, inscrita contra el titular del dominio revocable, ésta se perfeccionará por el solo transcurso del plazo, debiendo el registro dar de baja la inscripción dominial superpuesta del titular contra quien se efectuó la regularización, cuando el interesado lo solicite, o en la primera oportunidad en que se produzca la modificación del asiento; cumplidos los diez años previstos en la ley, se producirán los mismos efectos del nuevo régimen.

Art. 3º – Incorpórase como artículo nuevo, a continuación del artículo 9º de la ley 24.374, el siguiente:

Artículo 9º bis: Cuando sobre los inmuebles a que se refiere esta ley se registraren boletos de compraventa en conformidad al régimen de la ley 14.005 y su modificatoria ley 23.266, los compradores serán citados en la forma y condiciones que establece el artículo 6º inciso d) de esta ley. La ausencia de oposición o su rechazo, en conformidad a los términos de la presente, determinará la caducidad de pleno derecho de la anotación de la promesa de venta prevista en la ley 14.005, lo que se registrará simultáneamente con la inscripción de dominio a que se refiere el artículo 8º de la presente ley.

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Transcurridos más de cinco años desde la sanción de la ley 24.374, resulta oportuno analizar las fortalezas y debilidades de la norma en el ámbito de su aplicación cotidiana y en el impacto producido en el tejido social que el legislador tuvo en cuenta

como su principal destinatario. En principio, debemos señalar, que nos encontramos frente a una ley de avanzada en el mundo jurídico, cuya aplicación ha devuelto la tranquilidad y ha restablecido la justicia entre los particulares, llevando certeza a situaciones otrora manifestamente inequitativas.

La principal debilidad se ha revelado en el hecho que las escrituras otorgadas contradicen el sentido de la expresión “título de propiedad” al que apuntaba la ley, puesto que éstas no permiten a sus titulares ni la constitución de derechos reales sobre el inmueble, ni la modificación, transferencia o afectación a regímenes especiales como los de bien de familia de la ley 14.394 y propiedad horizontal de la ley 13.512, entre otros. El conflicto encuentra su raíz en los aspectos técnicos que regulan la inscripción en el Registro de la Propiedad de la escritura de regularización dado que ésta no permite cancelar el dominio anterior, según dispone el artículo VI inciso e).

El avance de las comunicaciones, y especialmente la inmediatez de la publicidad registral indicarian que el plazo de diez años para perfeccionar el justo título con buena fe al que apunta la ley en su referencia al artículo 3.999 del Código Civil es excesivo, tal como puede verse en la legislación comparada. El artículo 1.152 del Código Civil mexicano establece en cinco y diez años el plazo de usucapión, según sea la posesión de buena o mala fe, en tanto que el Código Civil chileno determina un plazo de prescripción ordinaria de cinco y diez años, entre presentes y ausentes respectivamente.

El legislador, al sancionar la ley vigente consideró que el derecho vigente tiene solución para todos los casos, pero planteó el interrogante sobre la posibilidad del sistema judicial argentino para procesar los reclamos y poner a disposición de los afectados dichas soluciones, y es atendiendo a tal fin que se ponen a consideración las modificaciones propuestas.

Conviene recordar en este punto que las condiciones de excepción que motivaron la sanción de la ley 24.374 mantienen plena vigencia, se siguen vendiendo lotes o departamentos en cuotas por empresas que hasta la fecha no garantizan más que con su responsabilidad individual el cumplimiento de la obligación de escriturar, ocurriendo muchas veces que llegado el momento de la misma, esta se ve frustrada por distintos motivos como la disolución de las empresas, el fallecimiento de sus integrantes y la afectación por medidas concursales que determinaron la indisponibilidad jurídica de sus bienes, entre otros.

La injusticia que trató de resolver la ley, no puede por tanto, quedar limitada en el tiempo, y –al menos hasta que se encuentren soluciones que eviten tan graves daños– deberá mantenerse su beneficio para todos aquellos que fueron víctimas de las referidas circunstancias económico-sociales. La reforma propuesta concede el beneficio a los ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante cinco años con anterioridad a la iniciación del trámite, sin limitarse a una fecha determinada.

El artículo 2º de la norma propuesta tiene como objetivo terminar con la interpretación dubitativa sobre el carácter de la escritura otorgada en los casos del artículo 6º inciso e). Si bien de la remisión al artículo 3.999 del Código Civil, que hace el actual texto del artículo 8º de la ley, no quedan mayores dudas sobre el carácter de un verdadero justo título de la escritura conferida en los términos del artículo 4.010 del Código Civil, y por tanto se trata de un título de propiedad otorgado por quien no es dueño (el Estado) a favor de quien acredita el cumplimiento de los requisitos de la ley y como ocupante con posesión pública, pacífica y continua, acreedor a esa transmisión, la subsistencia del dominio del titular originario motiva interpretaciones diversas sobre el ejercicio de ese derecho y su registración.

Por ello definimos la naturaleza de la escritura referida, y se limita el título de propiedad a un dominio revocable, que conforme a lo prescrito por el artículo 2.663 del Código Civil es aquel que "ha sido transmitido (...) cuando el actual propietario puede ser privado de la propiedad por una causa proveniente de su título". La reserva legal de protección del derecho del propietario contra quien se regulariza, permite a éste ejercer derechos contra el titular regularizado en el plazo de cinco años, desde esta nueva inscripción, la que tendrá carácter originaria e independiente de la anterior, creando uno de los supuestos técnicos de superposición dominial ante la imposibilidad de cancelar un dominio sin sentencia judicial que lo resuelva.

Se mantiene entonces una superposición dominial en dos ramas: a) la del propietario originario que ni accionó contra la regularización en el procedimiento administrativo ni lo hizo dentro del plazo de caducidad del artículo 3.999 del Código Civil en vía judicial; y b) la del regularizado, que cumplido el plazo, tiene un dominio perfecto, oponible contra todos, pero enfrentado con un derecho igual en la otra rama hasta que una de las dos se cancele.

La superposición dominial conspira contra la exactitud que pretende el Registro de la Propiedad en sus asientos, pero es una realidad que hasta la fecha no se ha podido superar y cuya depuración requiere la sentencia judicial. Se trata entonces de un recurso técnico-jurídico para solucionar un serio conflicto social, que se impuso como consecuencia del cumplimiento de sentencias de usucapión en el régimen del viejo Código, donde se declaraba el derecho emanado del artículo 4.015 del Código de Comercio sin cancelar el anterior, con lo que subsistía una doble titularidad registral.

El título proviene de una sentencia judicial, y sólo quien alegue un derecho similar contra él, o derivado de la otra rama de inscripción dominial, puede pretender una definición judicial sobre titularidad válida. Así, utilizada la superposición dominial registral para garantizar por un lado el derecho de propiedad del titular originario y no defraudar al beneficiario de la regularización con una inscripción que no responda a la legítima adquisición de un derecho de dominio, se deberá limitar toda acción autónoma del Registro de la Propiedad que pretenda la depuración de estos asientos, que pudieran configu-

rar una limitación al ejercicio del derecho regularizado. Con la sola prevención de la superposición o doble dominio, el titular regularizado podrá ejercer todos los derechos del propietario, entre otros el de vender, gravar, afectar al régimen de bien de familia, donar, sin que pueda causar perjuicio alguno, por cuanto quien contrata con titulares de tal especie, tiene debidamente publicitado el alcance de su derecho, en igual medida que se publicitan medidas cautelares, o gravámenes, restricciones o interdicciones sobre la cosa.

Para depurar el asiento, se sugirió accionar en vía judicial, previéndose un procedimiento sumarisimo, atento a la difusión a través de la publicidad registral que ha tenido y el tiempo transcurrido, sin embargo, es a todas luces inconducente a la solución del conflicto que pretendió dar a la ley, en tanto, por las condiciones económicas no podían reclamar su derecho por las vías regulares legisladas hasta la fecha.

La falta de sentencia judicial, en modo alguno puede lesionar un derecho que tan profusamente ha defendido el procedimiento instaurado por el legislador para la regularización dominial. Después de todo este procedimiento de seguridades y recaudos, publicidades y anuncios, controles y traslados, pretender un nuevo procedimiento judicial para decir que la regularización vale, equivaldría a ignorar lo que la ley pretendió establecer.

El sistema, para que sea verdaderamente efectivo y práctico, debe funcionar con un plazo de caducidad, al que sólo se le pueda oponer la sentencia judicial en contra de la regularización, o de la comunicación vigente, de que la misma está siendo cuestionada en juicio. De esta forma, quien como propietario originario plantea la nulidad de la regularización podrá, antes de cumplirse el plazo, comunicar al registro su cuestionamiento y el plazo no producirá sus efectos.

Como toda medida cautelar, tendrá a su vez un plazo de caducidad de cinco años, vencido el cual, si no fuera revocada, caerá automáticamente, produciendo el efecto definitivo de la regularización inscrita, y cancelando la que apareciera superpuesta.

Para evitar discusiones de carácter instrumental en el aspecto registral, es necesario prever cómo operará la cancelación del asiento. De tal forma, se legislará sobre la rogatoria del interesado, que ante la falta de oponibilidad alguna en el asiento por la única parte con derecho a ello (titular del otro asiento dominial superpuesto), podrá peticionarlo en cualquier momento a partir de operarse la caducidad del plazo, o, si así no lo hace, resolverlo el registro de oficio al tomar intervención en cualquier modificación del asiento.

Queda por aclarar qué sucederá con las inscripciones que se vinieron practicando hasta la fecha, que lo fueron por diez años, pero que por errónea interpretación reglamentaria, no tuvieron el alcance de verdadero dominio revocable. Dado que el asiento del titular originario contra quien se hizo la modificación no sufre merma alguna en su derecho, el plazo de caducidad previsto por la ley en diez años deberá operar en igual forma que el nuevo régimen previsto de cinco años, con dominio revocable y

registración de la superposición, correlacionando ambos asientos.

La variante técnica, consistirá ahora, en confeccionar una nueva matrícula o asentar a continuación de la titularidad anterior, la registración del titular regularizado, cancelando el asiento como en cualquier otra transmisión dominial.

Concretamente, la reforma propone reconocer en forma expresa que la escritura del artículo 6º inciso e) produce la adquisición del dominio por el beneficiario. La limitación al dominio revocable, pretende salvaguardar por el plazo de prescripción (5 años según este proyecto) el derecho del propietario anterior, que si acciona judicialmente y triunfa, depura por esa sentencia su propio dominio. Si no se acciona o resulta perjudicado por la sentencia, hace factible el perfeccionamiento del regularizado tras el cumplimiento del plazo.

Finalmente, en cuanto al artículo 3º, su objeto es tender a evitar la probable colisión entre la ley 24.374 y la 14.005 y su modificatoria 23.266 o, en todo caso, a integrar normativamente los preceptos de estas leyes, en la seguridad que ambas poseen un ámbito propio de aplicación pero aventando de raíz la posibilidad de una eventual interpretación distorsionante de la finalidad que a cada una de esas leyes le es particular.

Señor presidente: Por las consideraciones expuestas de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

Roxana I. Latorre.

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

RESUELVE:

Encomendar a los senadores integrantes de la delegación argentina a la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, a impulsar la aprobación de una recomendación en la próxima reunión plenaria del organismo, que se pronuncie en contra de la importación de arroz subsidiado desde los Estados Unidos de América a cualquier país integrante del Mercosur, y a la vez promueva acciones orientadas al fortalecimiento del complejo agroindustrial del sector, incluyendo el establecimiento de un arancel externo común del 35 % para todos los tipos de arroz.

Ricardo C. Taffarel.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La economía arrocerá en la Argentina tiene una importancia secundaria si la analizamos desde la fría óptica macroeconómica, pero es de vital importancia para algunas economías regionales, como es el caso de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Este complejo agroindustrial ha protagonizado un notable proceso de crecimiento durante la década de los 90, al punto que pasó a constituir el principal rubro dentro del producto bruto geográfico de

la economía entrerriana, y uno de los productos más significativos de sus exportaciones.

La actividad arrocerá no sólo significó un fuerte aporte a la generación regional de riquezas de origen agropecuario, sino que también se complementó con su elaboración, a través del desarrollo de un sector industrial dinámico, con una notoria presencia de empresas pequeñas y medianas de la zona.

Sacudido por la crisis brasileña de fines de los 90 (ya que el vecino país era el principal destino de las ventas externas del sector), y por la posterior implosión del régimen de convertibilidad en nuestro país (donde la devaluación generó un fuerte aumento en el precio del gasoil, y por esa vía de los costos de producción), los productores arroceros argentinos han venido sufriendo también la distorsiva política de los Estados Unidos de América, que en forma permanente subsidia a sus exportaciones de ese producto.

En estos últimos años, Brasil importa arroz fuertemente subsidiado por el gobierno de los Estados Unidos, por cifras que casi duplican el precio que reciben sus productores.

Así, entre noviembre del año pasado y marzo del corriente, Brasil ha importado del país del Norte alrededor de 170 mil toneladas de arroz; y en los años anteriores tenía un stock de casi 750 mil toneladas.

Esto provoca una fuerte caída del precio del producto, que afecta no sólo a nuestros productores arroceros, sino también a los productores del Uruguay y del propio Brasil, constituyendo una competencia desleal que desnaturaliza el libre comercio y pone al descubierto la falsa actitud de los Estados Unidos, de pregonar la liberalización comercial de los países periféricos, y de practicar una agresiva política comercial a favor de sus productores.

Sorprende también la actitud del Brasil, principal socio comercial del Mercosur, y uno de los más firmes impulsores del proceso de integración, que ha venido protagonizando un rol crítico en distintos escenarios internacionales, por los subsidios de los países desarrollados que empobrecen a los países productores de bienes primarios.

Al permitir la continuación de la importación de arroz subsidiado desde los Estados Unidos, el nuevo gobierno del Brasil entra en contradicción con esa prédica y también con sus reiteradas posturas a favor del fortalecimiento del Mercosur.

Hoy los productores arroceros reclaman legítimamente una firme actitud de nuestros gobiernos, que no sólo se oponga a los subsidios distorsivos que otorgan los Estados Unidos, sino que pidan por la adopción de medidas que protejan y fortalezcan al sector.

Una de esas medidas es el establecimiento de un arancel externo común del 35 % para las importaciones de todo tipo de arroz, lo que de ninguna manera entra en contradicción con las normas vigentes de la Organización Mundial de Comercio, y que podría atemperar los perjuicios de los subsidios estadounidenses.

Dado que en el mes de julio se ha de realizar una nueva reunión plenaria de la Comisión Parla-

ria Conjunta del Mercosur, es oportuno instruir a los senadores integrantes de la delegación argentina para que impulsen la aprobación de una recomendación que considere el interés y los reclamos de nuestros productores arroceros.

Ricardo C. Taffarel.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – A partir de la vigencia de la presente ley, toda participación accionaria de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera en sociedades comerciales que desarrollen actividades estratégicas para la República Argentina, no podrá exceder en su conjunto el 49 % del total del capital social.

Art. 2º – A los fines de la presente ley, se considerarán actividades estratégicas para la República Argentina las siguientes:

- a) Preservación de recursos naturales;
- b) Explotación de servicios turísticos;
- c) Actividad marítima, pesquera y portuaria;
- d) Seguridad nacional;
- e) Prestación de servicios públicos de transporte, comunicaciones, energía eléctrica, agua y gas;
- f) Explotación de medios de comunicación radial, televisiva y gráfica.

Art. 3º – Estas disposiciones no afectarán derechos adquiridos. Sin perjuicio de ello, a partir de la vigencia de las mismas, en caso de transferencia del control de empresas o sociedades comerciales que desarrollen las actividades indicadas en el artículo 2º, ya sea que dicha transferencia se realice a través de la venta directa de la participación accionaria o de procesos concursales, se deberá dar cumplimiento a la limitación establecida en el artículo 1º en relación a los nuevos adquirentes de las referidas sociedades comerciales.

Art. 4º – Comuníquese Poder Ejecutivo.

Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

A partir de la sanción de la ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, la que en su artículo 3º puso fin a la paridad con la divisa norteamericana establecida por la Ley de Convertibilidad que rigió a la economía de nuestro país en los últimos 10 años, se ha producido una alteración del valor de los bienes de capital y activos de todas las empresas que han venido desarrollando su actividad en la República. Entre ellas se encuentran las de vital importancia estratégica tales como las prestadoras de servicios públicos, las que explotan recur-

sos naturales, medios de comunicación, turismo, etcétera.

Ante este brusco cambio en la normativa jurídica que fuera base de la actividad económica en nuestro país en la década anterior, no puede dejar de advertirse la situación de desventaja en la que han quedado las empresas locales, a raíz de la salida de la convertibilidad, en contraposición a aquellas que no han sufrido el desmedro del valor de su moneda.

Ello hace necesario dictar medidas a fin de disminuir las consecuencias negativas del desequilibrio generado por dicho proceso devaluatorio, a través de instrumentos jurídicos adecuados para esta situación especial que vive nuestro país, la que otorga condiciones más que favorables a los capitales extranjeros para la adquisición de empresas que prestan servicios.

El posible crecimiento de un proceso generalizado de transferencia de control de prácticamente la totalidad de las actividades económicas esenciales de nuestra nación pondría en grave riesgo la independencia que toda nación debe resguardar.

Para equilibrar dicha situación, y en consonancia con otras legislaciones extranjeras en especial la de nuestra hermana República de Chile, que posee normas en el mismo sentido a la del presente proyecto, es que se propone limitar la participación accionaria de capitales extranjeros a un 49 % del total del capital social de la empresa respectiva. Adviértase que esta limitación vigente desde hace años en Chile no ha afectado negativamente su desarrollo económico como nación.

Sin perjuicio de la necesidad de regular legalmente esta problemática y dada la amplitud de interpretaciones que se pueden dar respecto de la definición del concepto de actividad estratégica, en el artículo 2º de esta iniciativa se define taxativamente dentro de dicho concepto sólo a determinadas actividades o intereses como son la preservación de recursos naturales, la explotación de servicios turísticos, marítimos pesqueros y portuarios, la prestación de servicios públicos esenciales, la propiedad de los medios de comunicación, y por supuesto, todo lo atinente a la seguridad nacional.

No desconocemos la extranjerización de la propiedad de los servicios públicos que se produjo en el proceso privatizador de la década pasada, pero sin embargo en aquella ocasión las circunstancias económicas no provocaban el desequilibrio que ahora existe a raíz de la derogación de la ley de convertibilidad 23.928.

Por ello esta ley no busca modificar situaciones de hecho ya consumadas que han generado legítimos derechos adquiridos respecto de aquellas empresas de capitales extranacionales que acudieron a la licitación, concesión o privatización de servicios públicos. Pero en caso de producirse en las actuales circunstancias una transmisión de derechos

de propiedad por parte de las actuales empresas que realizan actividades esenciales, considero vital para proteger la autonomía de nuestra nación, aplicar una limitación que impida el control de las empresas referidas por parte de capitales extranjeros.

Por todos los fundamentos expuestos solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Mabel L. Caparrós. Mario D. Daniele.

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, cree el área de medicina tradicional indígena en el ámbito de la Unidad de Atención Primaria de la Salud, con el objeto de:

- Formular una estrategia de acciones conjuntas para el estudio y aprovechamiento de las plantas medicinales, y por ende de la medicina tradicional indígena como un instrumento de apoyo a la atención primaria de la salud.

- Promover la formulación de políticas conjuntas para la incorporación de la medicina tradicional indígena al sistema nacional.

- Fomentar programas educativos sobre el uso adecuado de plantas medicinales, dirigidos a la población en general.

- Propiciar a la capacitación del personal de salud en el uso de plantas tradicionales científicamente válidas para la atención primaria de la salud.

- Elaborar normas, planes y programas de medicina tradicional indígena en los servicios de salud del país.

Sonia M. Escudero.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

En las poblaciones indígenas de América era común a todas las naciones la utilización de innumerales especies de plantas para el uso medicinal. Este modo de curaciones significaba una relación profunda entre el hombre y la naturaleza. De manera que las plantas acompañando a la curación espiritual, alcanzó un gran lugar en el conocimiento indígena, logrando su mayor magnitud en los pueblos localizados en las regiones selváticas y boscosas, pues estas áreas poseen una diversidad biológica enorme, que las comunidades indígenas han sabido reconocer, comprender y transmitir a lo largo de las generaciones.

El gran salto producido por la medicina occidental a principios del siglo XX, nos ha hecho pensar equivocadamente que la botánica medicinal nativa usada como terapéuticas exitosas por los indígenas, ya no tenían nada que aportar a la síntesis lograda por la farmacopea industrial y que las tecnologías

desarrolladas por la ingeniería médica y la bioingeniería en el laboratorio de análisis, eran el arsenal único del diagnóstico, excluyente de cualquier otra práctica semiológica.

Sin embargo, hacia fines del mismo siglo, y con nuevos descubrimientos en el campo de la medicina, y el desarrollo de nuevas tecnologías por parte de la ciencia occidental, producen un cambio en la visión del uso y potencialidad de las plantas medicinales.

Nuevos negocios surgen de la mano del desarrollo de las industrias de la farmacia y la biotecnología; los recursos genéticos, que son muestra de material orgánico de cualquier forma de vida, se convierten en uno de los objetivos más importantes para estas grandes empresas. Es así que se inicia una actividad febril en todo el mundo llamada bioprospección, con el objeto de hallar estos recursos genéticos. Que una vez analizados puedan generar nuevas drogas patentadas, semillas, bacterias y otros productos biotecnológicos.

En el campo del uso medicinal, el conocimiento tradicional indígena de las plantas, se convierte en una de las metas de la bioprospección que llevan adelante los grandes laboratorios. Lograr conocer las propiedades curativas de las diferentes plantas supone un ahorro de enormes cantidades de dinero y tiempo a los bioprospectores sin contemplar en profundidad la relación que existe entre la tierra, el hombre y las otras formas de vida.

En síntesis, la influencia de un positivismo insistente cargado de racionalidad ajena al subdesarrollo de los pueblos de América del Sur, ha abierto un interrogante social de agudo sentido crítico. Las medicinas llamadas alternativas, de diferentes orígenes, presumidas de posmodernidad, no son otras, que las viejas prácticas de los ex novos/ex antes, que puestas de moda por la vulnerabilidad económica se han transformado en grandes fuentes financieras, cuando no, acompañadas de la innoble condición de falta de respeto a la idiosincrasia y a la fe pública.

En contraposición a cuanto sucede en otras latitudes, en nuestro país es aún común utilizar el término "yuyos" cuando se habla de plantas medicinales, asociado al curanderismo, la superstición y a la ignorancia.

Los nuevos descubrimientos en el campo de la medicina, y el desarrollo de nuevas tecnologías ya descritas, juntamente con el reconocimiento que la Organización Mundial de la Salud en su Asamblea Mundial WHA 44.32 de 1991 efectuara al valioso aporte de la medicina tradicional en el cuidado de la salud, marca un nuevo rumbo. Nuestro Ministerio de Salud —ente rector competente y responsable de la planificación, ejecución y coordinación de las políticas y programas que se lleven a cabo en el ámbito de esta medicina— no puede dejarlo de lado y debe, obligatoriamente, comenzar a transitarlo.

Por lo expuesto y en pos de atender integralmente y de manera armónica todas las acciones y requerimientos que surjan del uso de la medicina tradicional indígena por parte de los diferentes grupos de la sociedad, es una necesidad impostergable la designación de un área de responsabilidad en el Ministerio de Salud.

En un país sumido en su crisis más profunda. Obligado a crear programas de reparto gratuito de medicamentos esenciales. Sin posibilidad de atender la salud y la supervivencia de todos los ciudadanos, búsqueda de una convivencia armónica entre la medicina tradicional y la medicina moderna debe ser rápidamente emprendida. No sería comprensible continuar desperdiciando las propiedades de las plantas medicinales autóctonas que pueden constituir un recurso disponible y de apoyo a la atención primaria de salud. Y por ello le pido a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente (Gioja). – En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. – Señor presidente: este proyecto de ley ha sido largamente debatido en el Congreso de la Nación. Ha tenido su origen en este Senado donde fue tratado por las comisiones de Comunicaciones, de Libertad de Expresión y de Legislación General, en las cuales se debatió sobre la protección de los bienes culturales y cuyo dictamen se aprobó en este recinto.

Luego, pasó a la Cámara de Diputados donde después de casi un año se aprobó un proyecto que establece solamente modificaciones al artículo 5º. Por lo tanto, lo que hoy debemos debatir es si, conforme al artículo 81 de la Constitución Nacional, debemos aprobar las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados o insistir en el proyecto que aprobó el Senado de la Nación. En ambos supuestos se requiere mayoría simple, ya que así se aprobó en la Cámara de Diputados.

La modificación que se estableció en la Cámara de Diputados permite la aplicación de la figura del artículo 48 de la ley de quiebras, también conocida como salvataje de empresas o *cram down*, para todos los medios de propiedad cultural, con la limitación de que en el caso de los medios de comunicación se debe hacer respetando el 30 por ciento de titularidad de capitales extranjeros.

El tema de la propiedad de los medios de comunicación fue largamente debatido y se llegó

a la conclusión general –por parte de casi todos los senadores y diputados de la Nación– de que teníamos que adoptar una legislación similar a la de otros países del mundo como, por ejemplo, Alemania, los Estados Unidos, Chile, Brasil e Italia, donde para la propiedad de los medios de comunicación existe un límite a la participación de los extranjeros.

En su sanción, la Cámara de Diputados de la Nación aprueba un artículo 5º que establece la figura del *cram down* con una limitación del 30 por ciento en la participación.

Nosotros hemos estudiado este tema en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y por mayoría de sus miembros –con algunas disidencias– se ha llegado a la conclusión de que lo que debemos sostener es lo aprobado por el Senado de la Nación, rechazando lo aprobado por la otra Cámara.

Entendemos que la solución que brinda la cámara baja no es acorde con el momento que vive la República Argentina, ya que hemos pasado por una profunda crisis económica y donde, como consecuencia de esta crisis y de la pesificación asimétrica, muchos acreedores externos se han apoderado de la deuda privada argentina –los llamados “fondos buitres”– que pretenden, en forma agresiva, apoderarse de las distintas empresas de comunicaciones del país.

Como consecuencia de ello, esa limitación del 30 por ciento en la participación de capitales extranjeros establecida por la Cámara de Diputados es insuficiente, debido a que, seguramente, se va a recurrir a figuras como la simulación o la de transferencia de crédito a personas o sociedades argentinas con el propósito de que se pueda ejercer el salvataje de empresas, excediendo el límite establecido en el artículo 2º de la ley de medios culturales.

Otra de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de la Nación es que, en el caso de que no se obtenga un acuerdo concursal, pasado el período de exclusividad y con la autorización del juez se pueda solicitar la participación de capitales extranjeros. En este punto, entendemos que lo sostenido por el Senado tiene más solidez. En primer lugar, porque consideramos que todo lo que hace a los medios de comunicación hace a la estrategia nacional, a un derecho constitucional fundamental como es el de la libertad de expresión.

Por lo tanto, nos parece necesario que sea el Poder Ejecutivo quien vele por este patrimonio estratégico de la República Argentina. Consideramos que es inconveniente que sea el juez quien decida, sino que debe ser el Poder Ejecutivo quien se haga cargo de este asunto, pues de este modo también estamos respetando tratados internacionales como el de Montevideo o el de Nairobi, en los que se ha establecido que el espectro radioeléctrico es de propiedad de la humanidad y quien lo administra es cada uno de los estados, a través de sus Poderes Ejecutivos. Este concepto está plasmado en nuestra ley de radiodifusión, en donde ningún juez puede autorizar la incorporación de un accionista —ya sea vía la figura del *cram down* u otra— si no tiene la autorización previa del Poder Ejecutivo, que es quien vela por el cumplimiento de los requisitos para ser propietario de un medio de comunicación.

Señor presidente: insistimos en lo aprobado por el Senado de la Nación. Entendemos que éste es el proyecto que brindará una solución frente a la crisis de la radiodifusión y de los medios de comunicación.

Por otra parte, la figura del *cram down* fue introducida en la República Argentina en el año 1994 a través de la reforma de la ley de quiebras. Es una figura jurídica que viene del derecho americano e inglés y no de nuestros derechos tradicionales. Por ello, es una figura bastante discutida. Tanto es así que el mismo artículo 48 de la ley de quiebras determina expresamente que el *cram down* o el salvataje de empresas no se aplica para algunas personas jurídicas vinculadas con las mutuales, con los regímenes de jubilaciones y pensiones, de seguros y con relación a todos aquellos casos vinculados con regímenes especiales expresamente excluidos.

No quiero entrar en la polémica de qué es un bien cultural, porque se trata de un debate que el Senado ya efectuó en otra oportunidad. Hoy debemos circunscribirnos a tratar la modificación introducida por la Cámara de Diputados con respecto al artículo 5° de este proyecto, referido pura y exclusivamente a los medios de comunicación.

Comparto plenamente que la figura del *cram down* o salvataje de empresas debería ser excluida de todos los medios culturales. Pero este

no es el momento de tratar dicha cuestión. Ahora estamos tratando un caso concreto. Esto implica que, frente a la situación de excepción o de crisis que vive el país, debemos contemplar la solución que prevé el artículo 6°.

Muchos han sostenido que este proyecto de ley tiene nombre y apellido. Sin embargo, existen medios de radiodifusión en toda la República Argentina que se encuentran en graves dificultades económicas, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Por lo tanto, de ninguna manera este proyecto va a beneficiar a un determinado medio, sino que va a brindar la seguridad de que los medios de radiodifusión van a ser argentinos y no extranjeros, protegiéndose así la propiedad artística, cultural e histórica del país.

Por todo lo expuesto, señor presidente, pido a mis pares que apoyen el dictamen en mayoría y se mantenga lo resuelto por el Senado de la Nación.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.

Sra. Ibarra. — Señor presidente: seré muy breve.

Cuando se trató en su momento el proyecto de ley sobre medios culturales apoyé dicha norma en el tratamiento en general, pero me opuse en la consideración en particular a la redacción prevista por el dictamen en mayoría respecto del artículo 5°.

Entiendo que al haberse establecido un límite en cuanto al capital nacional, ello alcanzaba para la figura del *cram down*. Es decir, al haber *cram down* para empresas nacionales, entiendo que no hay ninguna explicación plausible para excluir a las empresas culturales de la posibilidad de recurrir a dicho instituto.

Posteriormente, este proyecto pasó a la Cámara de Diputados, la cual modificó el citado artículo e incorporó un criterio según el cual si sólo se hubiesen presentado al *cram down* empresas extranjeras, su participación debe ser analizada por el juez interviniente el cual, en ese caso, podrá establecer dicha "*cramdownización*".

Quiero señalar que no coincido con la posición adoptada en primera instancia por el Senado, ni tampoco con que la propia empresa afectada pueda determinar la participación de empresas extranjeras. Por su parte, tampoco me parece buena la redacción propuesta por la

Cámara de Diputados, que deja en manos del juez la decisión al respecto. En todos los casos, creo que si ya determinamos el límite de la participación del capital nacional para las empresas culturales, nada obsta a que sean "*cramdownizadas*" por una empresa nacional. El planteo respecto de que se pueden poner interpósitas personas, testaferros o algún tercero interesado, creo que entra en las generales de la ley de cualquier sociedad. Cualquier persona que litiga en tribunales puede encontrarse con testaferros. En ese caso, deberá llevar a cabo la acción de simulación o de derechos pertinente. Pero no me parece que haya una justificación racional para excluir de la figura del *cram down* a las empresas culturales. Teniendo en cuenta que las dos opciones incorporan esta posibilidad, voy a pedir autorización al cuerpo para abstenerme porque expresamente así lo dejé establecido en su momento y no coincido con ninguno de los dos articulados.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: cuando se trató en general este proyecto firmé un dictamen en minoría en el que expresé que consideraba que se estaba discriminando a otros sectores de la industria nacional. Lo dije en oportunidad del debate en este recinto y nombré a la senadora Caparrós, quien había presentado un proyecto omnicompreensivo. Dije que había otros sectores como la salud, la educación y la agricultura, que creía que eran estratégicos de la comunidad nacional y que se estaban marginando del tratamiento y de la protección que esta ley les estaba dando.

Hoy, señor presidente, volvemos a debatir el tema del *cram down*. ¿Por qué hice esta introducción? En algunos discursos que se han pronunciado en la Cámara de Diputados se decía que era la primera vez que se denunciaba que, aparentemente, era una ley con nombre y apellido o que era la primera vez que se mencionaba que otros sectores importantísimos estaban siendo discriminados de esta protección. En el ámbito de este recinto y en el de las comisiones, que se reunieron en plenario para tratar este tema, ya lo habíamos denunciado y consignado, como consta en las respectivas versiones taquigráficas.

Vuelvo al tema del *cram down* porque nuevamente está siendo objeto de discusión y de

debate. Quiero referirme a una cuestión muy importante en este país, donde el porcentaje de desocupación es altísimo, tal como lo he planteado en el dictamen de comisión que he mencionado.

Se dice que el *cram down* va a perjudicar a la industria nacional, que este instituto va a perjudicar a las empresas nacionales. Entonces, me vuelvo a replantear algunas cuestiones.

La Cámara de Diputados ha introducido una modificación a este proyecto, que el dictamen en minoría rechaza al aconsejar que se insista en el artículo tal como lo sancionó el Senado. En el marco de rechazar una ley que protege a una parte de la empresa nacional y no a todo el espectro de empresas que considero estratégicas para el desarrollo del país, me parece jurídicamente correcta la modificación realizada por la Cámara de Diputados porque ha introducido dos elementos muy importantes, uno de ellos jurídicamente correcto. ¿Por qué digo esto?

En primer lugar, ¿en qué etapa y dónde nos encontramos? Nos estamos refiriendo al *cram down*, el instituto de salvataje, dicho en castellano, que se desarrolla en el marco del proceso judicial. Este proceso judicial tiene un conductor y director, que es el juez del proceso. Así lo decía la ley de quiebras histórica, no la nueva con todas las modificaciones que le hemos realizado. Consecuentemente, el director de ese proceso es el juez y no podíamos sacarlo del ámbito en que lo habíamos sancionado en este Senado. Cuando se trató esta ley dije que estábamos violando normas y principios internacionales del derecho falencial. Quien decide la suerte y dirige el proceso concursal o falencial es el juez. Entonces, como estaba este proyecto que hoy avala el dictamen en mayoría, se sale del ámbito del Poder Judicial e introducimos a este ámbito al Poder Ejecutivo.

Paso a una segunda cuestión. La Cámara de Diputados elimina la opción exclusiva del deudor para requerir este procedimiento. Nosotros hemos morigerado lo que se llamó la "muerte civil" del deudor falencial. Cuando se hizo la última reforma de la ley de quiebras le dimos otra oportunidad para participar en el proceso y ofertar nuevamente junto con los "*cramdownistas*" o acreedores en este proceso. Es una legitimación absolutamente marginada y acotada la que tiene el deudor. Por lo

tanto, no podemos dejar la suerte de una empresa a la voluntad absolutamente discrecional del deudor. ¿Por qué? En el caso de un deudor que está perdiendo todo –porque el paso siguiente es la liquidación de la empresa– si se deja en sus manos la decisión de que puedan participar otros oferentes o no es perjudicar nada más y nada menos que la continuidad del trabajo, que significa nada más y nada menos que la fuente de trabajo de los trabajadores argentinos.

Entonces, esto se puede prestar a manipuleos espurios.

Se presta a que se “priorice” el capital, y a que se mezclen los titulares del capital con la continuidad de la empresa. Y respecto de esta cuestión, el maestro Cámara aconsejaba, varias decenas de años atrás, separar lo que es el capital o el empresario que fracasó de lo que es la empresa como tal –como unidad productiva–, y que está inmersa en todo este mundo de la producción y del trabajo.

La Cámara de Diputados ha introducido dos cuestiones que considero jurídicamente acertadas. En primer lugar –y por los fundamentos que ya di– estoy de acuerdo en que no quede en manos del deudor la decisión de que puedan introducirse otros oferentes.

En segundo término, la sanción dice que se debe proteger el espíritu de la ley, que es el espíritu omnicompreensivo de continuidad de la fuente de trabajo.

Entonces, creo que debemos analizar esta situación en blanco sobre negro. Si nos encontramos en un país en crisis, con índices impensados en otro momento en cuanto a la cantidad de conciudadanos bajo la línea de pobreza y con miles de filas de desocupados a lo largo y ancho del país, tenemos que darnos cuenta de que debemos legislar no para matar la empresa, más allá de la suerte del empresario.

Si no hay posibilidades, si fracasaron el concurso preventivo y el instituto de salvataje propuesto por argentinos o empresas nacionales para quedarse con el capital, no quedan más remedios posibles. Eso lo dice la ley de quiebras, que es una norma de orden público que protege intereses superiores más allá de los intereses privados. Luego de todas esas instancias no existe otra posibilidad que la quiebra.

Y la quiebra implica la liquidación de la empresa, a pesar de la existencia de una ley –que

todavía no logramos reformar– en la que la transferencia de la empresa implica la muerte de los contratos de trabajo.

Entonces, permitir el instituto del salvataje –tal como lo ha introducido la Cámara de Diputados– para salvaguardar el espíritu de la ley de quiebras y las fuentes de trabajo, sería evitar que nuevos compañeros de trabajadores engrosen las filas de desocupados de la Argentina.

En virtud de esto, y reiterando mi posición de que se trata de una norma con nombre y apellido que sólo atiende a un sector minúsculo de la Argentina –del empresariado nacional–, y de que existen otros sectores estratégicos –como el de la salud, la educación o la agricultura– que también han sido marginados, ante la actual situación del país considero que la modificación introducida por la Cámara de Diputados es jurídica y socialmente correcta.

Digo que es jurídicamente correcta porque la reforma de Diputados se basa en la idea de que lo único que puede salvar a un país es la continuidad de las fuentes de producción y de trabajo mediante el mantenimiento de las empresas.

Por estos motivos, insto a que se reflexione acerca de lo que hoy votaremos y que se acepte la modificación de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Gioja). – Tiene la palabra el señor senador López Arias.

Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible.

Según mi criterio, la redacción que viene de la Cámara de Diputados mejora sustancialmente el contenido de esta ley.

Voy a ser breve, porque hago míos muchos de los argumentos que dio, recién, la senadora Negre de Alonso. Se trata de una protección razonable del patrimonio cultural argentino. Creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. Y esto ha motivado que aquellos que no estábamos totalmente de acuerdo con la redacción de la ley, sancionada en su momento por el Senado, no pusiéramos obstáculos para el tratamiento y sanción de la iniciativa, en su oportunidad.

La redacción que da la Cámara de Diputados mejora algunos aspectos que justamente eran motivo de nuestra preocupación en el momento de su tratamiento en el Senado.

¿Cuáles son las observaciones que se habían hecho respecto de este proyecto de ley y que

son mejoradas por Diputados? La protección del patrimonio cultural tiene que tener en cuenta, antes que nada, el interés público nacional. Esto es algo fundamental y central.

Tal como fue redactado el proyecto original en el Senado, este interés público superior quedaba sujeto, en realidad, a una voluntad particular porque únicamente se habilita la incorporación, en el *cram down* de determinado tipo de empresas, ello sujeto a la voluntad y al pedido del deudor. Esto significa subordinar el interés público a un interés particular.

Creemos que es mucho mejor, en este sentido, la redacción de la Cámara de Diputados, según la cual es el juez quien evalúa, en caso de no haber oferentes y de plantearse la situación límite —como decía la senadora Negre de Alonso—, si realmente se va a abrir esta posibilidad o no. Para ello se tiene en cuenta el curso del proceso y cuáles son las posibilidades para mantener uno o dos principios que son fundamentales dentro del marco de la ley de quiebras, de la ley concursal, que son el mantenimiento de la empresa, por un lado, y de la fuente de trabajo, por otro lado.

Esta facultad que se le da al juez, según la redacción de la Cámara de Diputados, no es una facultad amplia o abierta, sino que el propio texto la está limitando porque tiene que tenerse en cuenta el espíritu de esta norma. Es decir que únicamente se arriba a la excepción, en cuanto a abrir las posibilidades de participación de sectores no nacionales, en aquellos casos en que las circunstancias lo hagan imprescindible para lograr el objetivo de mantener la fuente de trabajo y la actividad de la empresa.

Hago notar, además, señor presidente, que esto no lo resuelve la redacción de Diputados sino que, tal como quedó redactado en el dictamen original de la Cámara de Senadores, queda muy limitado. Algo que, en el espíritu de la ley, era muy amplio respecto de todo el patrimonio cultural, finalmente y luego de la redacción con que fue sancionado por el Senado, en su momento, queda limitado en este artículo exclusivamente a los medios de comunicación.

Sin entrar en mayores argumentos, voy a votar favorablemente el dictamen de la Cámara de Diputados porque realmente creo que soluciona estos temas técnicos, privilegia el interés público sobre el del particular y permite que sea el

juez quien conduzca el proceso concursal y quien, previa evaluación de la situación, respetando siempre el espíritu de esta ley, pueda abrir posibilidades que contribuyan a salvar la empresa y a mantener la fuente de trabajo.

Sr. Presidente (Gioja). — Tiene la palabra el señor senador Busti.

Sr. Busti. — Señor presidente: es innegable la crisis de los medios de difusión producto de la devaluación producida en la Argentina.

El aumento de los insumos, la disminución de la publicidad, la baja de la tirada de los diarios fueron las causas de la crisis de los medios de difusión. En el caso de los medios más chicos, los diarios de nuestras provincias, dejaron de pagar impuestos, dejaron de pagar a sus proveedores. En el caso de los medios más grandes, los medios nacionales, se endeudaron fundamentalmente con acreedores extranjeros.

En esta Cámara nos preocupamos, primero, por los medios más chicos. En ese sentido, tuvo sanción del Senado, previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, un proyecto del senador Yoma, que acompañamos otros senadores, en el sentido de disminuir el IVA para la compra del papel y para los espacios de publicidad de los medios provinciales. Lamentablemente, está durmiendo en la Cámara de Diputados.

Ahora estamos tratando este proyecto de ley. Y no nos tiene que sorprender la protección de los medios de comunicación nacionales o de las industrias culturales.

Inclusive los países vecinos protegen a sus medios de comunicación a través de la Constitución. El artículo 222 de la Constitución del Brasil, expresamente, dice que está prohibida la participación extranjera en empresas periodísticas o de radiodifusión de sonido o imagen. México establece la restricción a la participación extranjera. Lo hacen también Canadá y la Comunidad Económica Europea, a través del artículo 128 del Tratado de Maastricht. ¿Qué pasaría si se aprobara la modificación establecida por la Cámara de Diputados al artículo 5º en el sentido de posibilitar la aplicación del *cram down* a favor de los acreedores nacionales? Sería ilusoria la protección a los medios de comunicación. No solamente, como dijo una senadora preopinante, entraría a funcionar el testaferro o el acreedor por interpósita persona,

sino que la mayoría de los fondos del mercado financiero local está constituida por fondos nacionales, que son subsidiarios de acreedores extranjeros. Y la mayoría de las grandes empresas periodísticas nuestras están endeudadas con fondos extranjeros.

El otorgamiento de la potestad al juez del concurso de autorizar la aplicación del *cram down*, también violenta lo que establece la ley de radiodifusión en su artículo 3º, sobre la administración de la frecuencia y la orientación, promoción y control de los servicios de radiodifusión que son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo nacional.

—A las 17 y 41 ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, licenciado Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Busti. — Es decir que la exclusividad del control de los medios de difusión está en el Poder Ejecutivo. Y eso también se aplica en el derecho internacional. Es una cuestión pacífica desde el punto de vista doctrinario en el sentido del control por parte de los Poderes Ejecutivos. ¿Y por qué debe mantenerse la inaplicabilidad de este instituto con respecto a los medios de comunicación? Porque la causal de extinción de la licencia por concurso del licenciatario está establecida por el artículo 53 de la ley de radiodifusión que, en su inciso c), dice que la licencia de radiodifusión se extinguirá por el concurso de su titular. Pero una pacífica doctrina en el caso del concurso mantiene el funcionamiento del medio de difusión.

Solamente en el caso de la quiebra, cuando exista desapoderamiento, se elimina la licencia.

Por lo tanto, considero que mantener el texto de la Cámara de Senadores es lo correcto: hace a la protección que necesitan hoy los medios de difusión en la Argentina y es, además, no contraponer esta legislación con lo establecido en la ley de radiodifusión vigente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. — Voy a ser breve porque en su momento ya di los fundamentos como presidente de la anterior Comisión de Cultura. La pertinencia y legitimidad de este proyecto del señor senador Pichetto tenía que ver —y hoy lo vuelvo a decir— con el rostro de la soberanía que se conjuga en clave del derecho a la infor-

mación y a la comunicación. Y, por otro lado, hay algo que puede cifrarse como una medida de discriminación positiva.

Insisto en aquello que votáramos en el Senado. Sabemos —y lo dijimos en su momento— que a raíz de la devaluación las empresas nacionales se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y fragilidad dado que, como decía recién el senador Busti, poseen sus activos en pesos y sus pasivos en dólares. Por esa razón es que se requiere una medida de discriminación positiva, una protección adicional ante una eventual —pero casi segura por las tendencias “globalófilas”— intención de compra por parte de acreedores extranjeros de nuestros medios de comunicación nacionales. Y por esto es que se fundamenta la exclusión de los medios de comunicación de lo establecido en el artículo 48 de la ley de quiebras. O sea, evitar la apropiación directa, o a través de terceros, de nuestros medios de comunicación por parte de empresas extranjeras.

Esto responde a la jurisprudencia en la materia y, además, es una medida que tiene un carácter excepcional porque se trata de una situación excepcional. Es decir, no es algo que compete solamente a nuestro país.

Señor presidente: permítame hacer referencia a un documento sobre el estado de los medios trabajado entre agosto de 1997 y noviembre de 2000 por la World Association for Christian Communication, que auspició un programa de consultas regionales sobre la situación de los medios de comunicación en los países en desarrollo.

Indudablemente, nuestra región estuvo representada en las reuniones que se hicieron en México, Durban y Yaundés y, al respecto, solamente voy a mencionar dos consideraciones sobre el programa de consultas.

El documento dice: “En los últimos diez años las comunicaciones mundiales se digitalizaron, consolidaron, desregularon y globalizaron, entendiéndose implícito en el término globalización la supremacía de lo transnacional sobre las formas nacionales de economía, sociedad, política, cultura y comunicación.” Más adelante, agrega: “Las tendencias mundiales incluyen la globalización de la propiedad y el control de los medios de comunicación a través de intereses extranjeros que compran acciones en los me-

dios nacionales y locales. Es un elemento de empoderamiento la propiedad de los medios. Es una fragilidad para los países la libertad de expresión en ese contexto.”

Finalmente, concluyo con el pensamiento del argentino García Canelini, quien en la ronda de consultas advirtió que las industrias culturales, los medios de comunicación, son centrales en el reforzamiento de las tendencias concentradoras y en el proceso de hibridación ecualizada de la cultura.

Creo que en su oportunidad hice consideraciones suficientemente amplias sobre la necesidad de sancionar el proyecto en consideración.

Insisto en lo que oportunamente fuera votado en el Senado y digo que una protección de las empresas de medios y las industrias culturales nacionales es algo que tiene ubicuidad, pertinencia y sentido, como así también el que la futura ley se convierta en una acción positiva en clave de soberanía.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, corresponde votar el pedido de autorización para abstenerse de votar a la señora senadora Ibarra.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda autorizada la señora senadora Ibarra.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Perdón, señor presidente, pero juntamente con el señor senador Maestro, queríamos hacer algunas consideraciones.

Sr. Presidente. – De acuerdo.

Tiene la palabra el señor senador Maestro.

Sr. Maestro. – Señor presidente: los senadores del bloque del radicalismo reiteramos nuestro voto afirmativo, tal como sucedió con el proyecto votado en su momento, a la iniciativa que rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Somos plenamente conscientes de la grave situación que vive el sector de la industria cultural y los medios de comunicación en la Argentina, producto de una situación realmente lamentable que se dio en el tiempo generada por la crisis económica y por la falta de resguardos y criterios restrictivos —medidas que rigen en casi todos los países del mundo— a la hora de abrir las industrias culturales o los medios de comunicación a la inversión extranjera.

Así es como nos hemos encontrado con que la mayoría de los medios de comunicación están en la mayoría de los casos o íntegramente endeudados con acreedores extranjeros.

Nos parece además que es reiterar el propio compromiso y la convicción de este bloque del radicalismo, que en su momento introdujo, juntamente con algunos senadores del justicialismo, esta cuestión en la Cámara de Senadores hace ya prácticamente un año, donde después de una larga discusión, de un análisis pormenorizado y de introducir una gran cantidad de variantes llegamos a la redacción del proyecto que en definitiva fue votado por la Cámara.

Hoy volvemos entonces a reiterar nuestra convicción de que estábamos en lo cierto, que nuestro proyecto era realmente bueno para la finalidad que se perseguía. En ese entonces, en la propia comisión se analizaron las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Sería interesante incorporar el acta de la comisión entre los antecedentes de esta sanción, porque allí quedó también fijada la posición mayoritaria de los integrantes de este cuerpo en el sentido de no aceptar esas modificaciones.

Nosotros entendemos que la aplicación del *cram down* a favor de acreedores nacionales, esta posibilidad de priorizar a los acreedores nacionales respecto de los de origen extranjero, manteniendo superviviente el instituto establecido por el artículo 48 de la ley de quiebras, no hace más que desconocer la realidad y el contexto en que se mueve esta industria actualmente en nuestro país.

Y si bien reconocemos el innegable fin que seguramente persiguieron los diputados que votaron esa modificación, en la práctica creemos que debemos manejarnos con los datos de la realidad. Es decir, la amenaza concreta y predatoria de los capitales extranjeros y de empresas que, con la redacción que le dieron en la Cámara de Diputados, a nuestro criterio no desaparece.

Por el contrario, lo que aquí se ha expresado lo compartimos, ya que a través de testaferros, de terceros o de interpósita persona muy fácilmente se puede continuar con la estrategia de cooptación, burlando la finalidad de protección que persigue el legislador; en este caso, al menos, el evidente propósito que han tenido los

senadores que impulsaron este proyecto. Más aún, cuando vemos que la situación de endeudamiento actual prácticamente no se refiere precisamente a acreedores nacionales.

Así que nosotros vamos a acompañar nuevamente la sanción originaria. No nos parece tampoco buena esta modificación de otorgamiento de la potestad al juez, por las razones que ha dado el miembro informante, que han abonado también otros señores senadores y por lo que se ha expresado en la comisión.

También nos preocupa la falta de especialización de muchos jueces de provincia en cuanto a la consideración de esta visión general que se debe tener en materia de medios de comunicación, referida a la inaplicabilidad del *cram down* a dichos medios y la necesidad o no de mantener los mismos.

Por lo tanto, vamos a acompañar con nuestro voto la sanción oportunamente efectuada por esta Cámara. De esta forma vamos a permitir también, con el voto de la gran mayoría de los demás señores senadores de otras bancadas, que hoy podamos plasmar en ley un objetivo perseguido desde hace mucho tiempo, que es el resguardo del sector cultural argentino y la preservación de las empresas y de las fuentes de trabajo.

En definitiva, se trata de que en una instancia nueva del país, donde debemos tratar de defender la posibilidad de recuperación de todos los sectores de la vida nacional, también podamos comenzar a recrear una industria periodística de medios de comunicación que sean argentinos y que defiendan el interés nacional.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy breve, así pasamos a votar. No me voy a referir al proyecto de ley; lo hemos discutido largamente en espacios públicos, con la presencia de juristas y de especialistas de medios aquí en el ámbito del Senado.

Estoy convencido de que la eliminación del *cram down* y la limitación del treinta por ciento del capital extranjero apunta, fundamentalmente, a consolidar a las empresas nacionales de medios de comunicación y a la creación de la opinión pública desde una perspectiva y una visión nacionales. Estos argumentos han sido largamente expuestos.

Finalmente, para concluir este debate tan importante que hace un año empezó en este Senado, quiero mencionar que ayer estuve leyendo un medio de comunicación muy importante del país, que mencionaba que esta Cámara tiene una imagen negativa del 92 por ciento. No se sabe quién fue la encuestadora ni dónde se hizo la encuesta; indudablemente, tal vez esta institución arrastra mucha frustración de los procesos colectivos que ha tenido el país y también algunos errores que se pudieron haber cometido en el pasado.

Pero este Senado de la mala imagen es el que ha defendido con fuerza y convicción el patrimonio nacional y los medios de comunicación porque, como bien expresaba el señor senador Menem, este proyecto de ley va en defensa de los medios de comunicación gráficos, radiales y audiovisuales. El concepto cultural es amplio y genérico, pero con esta iniciativa estamos defendiendo a los medios de comunicación nacionales.

Así, este Senado, con todo el desprestigio que la historia nos ha dado, está apuntalando a las empresas nacionales. A propósito, leyendo el debate en oportunidad de tratarse este tema en la Cámara de Diputados, he observado con sorpresa –a veces la historia nos coloca casi en la ironía y en la contradicción– que muchos importantes dirigentes políticos contruidos desde los medios de comunicación han tenido una clara actitud de repudio a este proyecto de ley y lo han calificado como una norma que beneficia a un medio determinado, formulando para ello diversas apreciaciones negativas. Y esto también encierra un mensaje y una reflexión sobre algunos hombres y mujeres que se construyen desde los medios de comunicación en la realidad política y que luego, indudablemente, demuestran no tener una clara conciencia nacional.

Espero que este proyecto de ley sirva para la consolidación de una empresa nacional de medios de comunicación, porque –repito– ello hará a la construcción de las ideas en el país y también contribuirá a empezar a elaborar imágenes institucionales serias.

Sé que el Senado está en deuda con la sociedad argentina y que tenemos que hacer una tarea muy firme de recuperación de la credibilidad –en ese sentido, hoy estamos viviendo tiempos de cambio en la Argentina, que espera-

mos poder apuntalar desde este espacio—, para que la gente vuelva a creer en esta institución.

Y, al mismo tiempo, esperamos de los medios de comunicación una evaluación seria y responsable de nuestra tarea y no que, como sucede muchas veces —desde visiones ligeras o pequeñas o porque es fácil criticar a la política y a los políticos desde cualquier ángulo—, se plantee permanentemente el deterioro de las instituciones y del Parlamento argentino.

Con estas reflexiones, pido que se insista en la sanción del texto aprobado originariamente por este Senado.

Sr. Presidente. — Esta Presidencia solicita autorización para que la votación se haga por signos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — A continuación, se va a votar el dictamen en mayoría. Esta Presidencia aclara que se requiere simple mayoría para insistir en la sanción originaria de este Senado.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: como usted dijo, si bien para insistir en la sanción originaria del Senado se requería de mayoría simple, la votación resultó afirmativa por más de dos tercios de los votos. Quisiera que quedara constancia de ello.

Sr. Presidente. — Así es. Queda constancia de que la votación resultó afirmativa por más de dos tercios de los votos.

Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Quiero dejar constancia de mi voto negativo.

Sr. Presidente. — Se deja constancia del sentido de su voto, señora senadora.

5

MODIFICACION DE LA LEY DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre el dictamen de la Comisión de

Salud y Deporte en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, por el que se modifica el artículo 15 ter de la ley 19.032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—El texto es el siguiente:

Buenos Aires, 12 de junio de 2003.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a ampliar las causales de intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, modificando a tal efecto el artículo 15 ter de la ley 19.032 y modificatorias.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 199

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Alberto A. Fernández. — Ginés M. González García.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — Modifícase el artículo 15 ter de la ley 19.032 modificado por la ley 25.615, artículo 12, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 15 ter: El Congreso de la Nación a propuesta de la Auditoría General de la Nación, podrá disponer por ley la intervención del instituto frente a situaciones de grave deterioro institucional que así lo justifiquen. La citada intervención no podrá exceder los ciento ochenta (180) días corridos ni ser prorrogada.

El Poder Ejecutivo podrá decretarla por el mismo lapso, dando de ello inmediata cuenta al Congreso, cuando aquel deterioro pueda poner en riesgo la administración general del instituto, el efectivo control administrativo y técnico de las prestaciones, el ejercicio de la fiscalización, los controles y las auditorías necesarios para garantizar la transparencia de la gestión o el cumplimiento de las obligaciones impuestas al directorio ejecutivo nacional en el artículo 6º de esta ley.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

NÉSTOR C. KIRCHNER.

Alberto A. Fernández. — Ginés M. González García.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Sra. Colombo. — Pido la palabra.

Tiene la palabra la señora senadora Oviedo.

—Varios senadores hablan a la vez.